

EL PATRIOTA.

PERIODICO POLITICO Y LITERARIO.

A tous les cœurs bien nés que la Patrie est chère!



MONTEVIDEO, MARTES 17 DE ENERO DE 1832.

NO. 17

Este Periódico se publica en la IMPRENTA del UNIVERSAL, y por ahora saldrá á luz los Martes y los Viernes de cada semana. Se reciben suscripciones en la oficina de dicho establecimiento, y en la tienda de D. Juan Gard á real cada ejemplar, llevándolo á las casas de los SS. suscritos.

INTERIOR.

DOCUMENTOS OFICIALES.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

Montevideo, Enero 13 de 1832.

Aunque el gobierno no haya tomado en consideración la nota que pretendió dirigirla el Presidente de la Comisión directiva para la extinción del cobre, no ha podido ser indiferente á su publicación en los periódicos; en ella aparece una Comisión particular, cuya creación cometió la lei al gobierno, alzándose á una categoría que no puede pertenecerle, y abriendo una lucha tan impropia como injusta con los poderes constitucionales; aparece, además, un lenguaje atrevido en los conceptos, desmesurado en las voces, é inconciliable con los respetos y con el decoro que el interés directo de la sociedad entera reclama se tribute á la 1.^a autoridad del Estado. Es verdad que los individuos de que la Comisión se compone han declarado solemnemente, que su intención ha sido llenar sus deberes, sin faltar á los respetos que se deben á aquella Autoridad, y que el gobierno se aquieta con esta declaración; mientras que concibe que han excedido de los unos, faltado á los otros, y equivocado sus ideas hasta un extremo escandaloso.

Pero sería de un funesto ejemplo, que la Comisión Directiva, dirigiéndose á la H. C. P. en iguales términos, no encontrase en su resolución, un motivo para reconocerse y volver sobre sus pasos, por mas que ellos hayan nacido de un zelo noble en su origen, aunque ejercitado sin meditación.

Tan inmeditados son, en efecto, los procederes que aparecen de la nota del Presidente de la Comisión en la sustancia y en la forma, que hasta las consideraciones y deferencias del gobierno se pretende convertir en principios para asestarle tiros de un modo innoble.

Como los derechos se recaudan en su mayor parte en letras, los que se atribuyen á la Comisión pudieran serlo en iguales proporciones que los del Tesoro: pero el gobierno dispensándola una preferencia gratuita, ha mandado siempre entregar el importe de su liquidación en moneda metálica: es en este sentido que dispuso momentáneamente de una pequeña cantidad, de la que se le habia destinado, y sin que pueda argüirse que en esos momentos mismos dejase de existir en caja el capital que por la Lei le correspondia, supuesto que existían además de la moneda, letras de mucho mas valor.

Pero el gobierno agravaría mucho la ilustración de la H. C. P. si descendiese de nuevo á reflexiones en un asunto sobre que se ha derramado tanta luz: así que, solo espera, que el Sr. Presidente á quien se dirige, quiera elevar á su conocimiento, los conceptos de esta nota, para que sean considerados en la resolución que se adopte; los mismos que si la H. C. lo juzga oportuno, esplanará el ministro de gobierno.

El que suscribe saluda al Sr. Presidente de la H. C. P. á quien se dirige con su mas atenta consideración.

LUIS E. PEREZ.
Santiago Vazquez.

Sr. P. de la H. C. P. del Poder Legislativo.

ACTA.

En Montevideo, á 11 de Enero de 1832 reunida la Comisión Directiva, no habiendo asistido los Señores Vilardebó, Hocquard, y Ramirez, y estando presente el Sr. Comisionado del Gobierno que pidió al Sr. Presidente esta reunión, fué leída y aprobada el acta anterior. El Sr. Comisionado pidió se leyese el acta en que se acordó co testar á la comunicación del Gobierno fecha 4 del corriente; en consecuen-

cia fueron leídas las del 5, 7 y 8 del mismo. Concluida esta lectura, manifestó el mismo Sr. Comisionado, que el oficio dirigido al Gobierno por la Comisión, fecha 9, no habia sido presentado en acuerdo de aquel, y que para verificarlo queria saber por un paso previo, si los que ha dado la Comisión Directiva han sido con objeto de conservar la armonia que tubo con el Gobierno, lo que no parece de la redacción de dicha nota, pues que por las actas que oyó leer se veía que no se ha discutido párrafo por párrafo aquella comunicación; por tanto pedía, que individualmente djesen los Señores de la Comisión, si aquellos han sido y son sus sentimientos; si están absolutamente de acuerdo en la redacción de la nota que con fecha 9 se dirigió al Gobierno, en contestación á la del 4; y si el contenido de ella comprende el espíritu con que se acordó elevarla á la autoridad: á cuyo efecto, para que la discusión fuese mas libre, se retiraba. El Sr. Presidente mandó llamar á los Señores Hocquard y Ramirez; este estaba en el campo, y aquel contestó que si pudiese vendría; después de haberlos aguardado media hora, la Comisión acordó, que el Sr. Presidente contestase al Sr. Comisionado, que el oficio dirigido al Gobierno con fecha 9 del presente, habia sido aprobado por la Comisión, en todas sus partes, antes de comunicarse; que las palabras *duda* y *altera*, que por error al tiempo de copiarse se encuentran en el oficio que el Sr. Comisionado leyó, deben ser *duda* y *atenida*, segun consta del libro de oficios; y que se refiriera á todo cuanto el Sr. Comisionado ha oído leer en las actas y oficios. Avisado el Sr. Comisionado de que la Comisión Directiva estaba pronta á responderle, se presentó, y habiendo sido instruido del acuerdo de la Comisión, pidió que en su presencia ratificasen individualmente los Señores de la Comisión lo que habian acordado; lo que se verificó, ratificándose todos en el acuerdo, y en que el concepto de la Comisión ha sido llenar sus deberes, sin creer que se ha faltado á los respetos que se deben á la Autoridad.—Silvestre Blanco, presidente.—Francisco Magariños.—Vicente Vazquez, secretario.

La Comisión Directiva de la sociedad de accionistas para la estincion de la moneda cobre extranjera, ha recibido la comunicación que el Sr. Comisionado le ha dirigido con fecha 12 del corriente, acompañándole orijinal la que el Exmo Gobierno ha mandado devolverle, por no estar conforme con los respetos que le son debidos; pero que la misma Comisión colectiva, é individualmente ratificó en presencia del Sr. Comisionado en la conferencia del día 11, por considerarla en un sentido enteramente opuesto.

Satisfecha la Comisión Directiva de que tanto en la forma, como en la substancia, se ha conducido en la presente cuestion de un modo legal y decoroso; y cuando, por otra parte, ella no tiene mas aspiración que la de llenar dignamente la confianza que ha merecido del cuerpo general de Accionistas, velando por sus intereses, y por la conservación de todas las garantías que la ley ha establecido, como una justa recompensa al importante servicio que este cuerpo ha rendido á la Nación, y al Gobierno; ha sido unanimemente de parecer, q' lo único que le incumbe en este caso, es esperar el resultado del reclamo que ha elevado á la H. C. Permanente.

La Comisión Directiva aprovecha esta oportunidad para anunciar al Sr. Comisionado, que por acuerdo de esta fecha, la Junta general de Accionistas será convocada para el día Domini-

go, 22 del corriente, á las diez de la mañana, en la sala del Tribunal Consular.

Todo lo que el Presidente de la Comisión Directiva, de órden de la misma, comunica al Señor Comisionado, para que se sirva elevarlo al conocimiento del Exmo. Gobierno.—Dios guarde al Sr. Comisionado del Gobierno muchos años.—Montevideo, 14 de Enero de 1832.—Silvestre Blanco, presidente.—Vicente Vazquez, secretario.—Señor Comisionado del Gobierno, D. Francisco Magariños.

COMISION PERMANENTE.

Montevideo Enero 16 de 1832.

La Comisión permanente ha considerado las comunicaciones de 4 y 13 del corriente, y los documentos que, con ellas, le ha dirigido el Poder Ejecutivo, como igualmente los que sobre el mismo asunto le elevó la comisión directiva de la sociedad para la extincion de la moneda cobre; y después de un detenido examen, ha acordado: se conteste al gobierno, que en los citados documentos, no ha encontrado la Comisión permanente materia alguna por la cual ella deba poner en ejercicio las especiales atribuciones que le marca la Constitución: en consecuencia de lo que, ha acordado tambien queden archivados en la secretaría.

El infrascripto Presidente pone en conocimiento de V. E. esta resolución, y con este motivo le reitera las protestas de su respetuosa consideración.

NICOLAS HERRERA.

Miguel Antonio Berro.

Exmo. Sr. Presidente interino de la República

MINISTERIO DE GOBIERNO.

Montevideo, 12 de Enero de 1832.

(Acuerdo.)

Difícilmente puede presentarse á la consideración de las autoridades un negocio mas delicado en su resolución, y mas importante en sus consecuencias, que el arreglo de las propiedades territoriales de la campaña. Ellas han sufrido grandes alteraciones, de resultados de las que ha experimentado el órden político, desde el año de 1810. El torrente de la revolución, que arrebató todo, ménos la tierra, ejerció en ella influencias poderosas; y la guerra de la independencia, prodigando sacrificios, y consagrando nuevos derechos, vino á establecer una lucha terrible entre los títulos que nacieron en aquella época de la Patria, y los que traen su origen de una antigüedad que, en esos días, hubiera sido ominosa. Estos se presentan hoy desnudos de todo prestigio ante la constitucion que consagra la inviolabilidad de las propiedades; pero aquellos, además de referirse á una época ennoblecida, vienen fortificados por la poderosa mano del tiempo unos, por leyes vijentes otros, y los mas por elocuentes ejemplos, ó mas bien, por principios, si no generalmente reconocidos, al ménos practicados con frecuencia.

El gran problema se hace mas difícil, si no inexplicable, para una resolución decisiva, porque no la admite jeneral: por entre todas las solicitudes se toca la necesidad de una escala dilatada de clasificaciones, para no confundir la virtud coa el crimen, el mérito con el vicio, el derecho con el abuso.

Sin duda ese convencimiento fijó la consideración de la Cámara de justicia, cuando elevó la consulta de 13 de Enero de 1830, que desgraciadamente no resolvió la Honorable Asamblea Constituyente. Mas, sea que los tribunales se hayan expedido sin detenerse en los principios que fundaron la necesidad de la consulta, ó bien que hayan adoptado reglas jenerales, que luchan con la fuerza de las cosas, ello es que acrecieron las dificultades que cercaban estas cuestiones, y se dejó sentir una

predisposición fatal en los poseedores para en-
gordarse á las resoluciones judiciales.

Es presumible que algunos ajitadores, aca-
chando los medios de promover resistencias y
extraviar los ánimos, empezaron á cultivar aque-
lla predisposición, para inspirar prevenciones con-
tra las autoridades constituidas, y especialmente
contra el Poder Ejecutivo, que, repugnando la
delicadeza del asunto, y reconociendo la conve-
niencia de evitar extremos peligrosos, se pro-
puso abrir una marcha de conciliación, que re-
clamaban ya su posición y responsabilidad. Con
este objeto se dictó la circular de 22 de agosto de
1830, por la cual, evitando los escollos de las
resoluciones jenerales, se preparaba un aveni-
miento, acomodado á los derechos que se aji-
tasen en cada uno de los varios casos cuestio-
nados.

Pero los efectos de la circular no correspon-
dieron á las esperanzas que fundó el gobierno:
mientras que los sucesos confirmaron su pre-
visión, y tomaron un carácter cada día mas alar-
mante. Mandatos judiciales, que se llamaron
despojos violentos, fueron repetidamente eludi-
dos, ó entorpecida su ejecución; debilitando así
los resortes de la administración de la justicia, y
provocando la continuación de actos, que impor-
ta tanto prevenir, cuanto podría ser peligroso el
empeño de destruirlos, despues de propagado tan
funesto ejemplo.

Esta consideración ha llegado á ser omnipoten-
te, como lo es la lei de la salud pública; por que,
aprovechando de la sencillez de los habitantes de
la campaña, se ha propagado metódica y jene-
ralmente que es el gobierno el que ha provocado
y aun dictado, los mandamientos de desalojo, ex-
pedidos por los tribunales respectivos. Nada se
ha omitido para concitar el odio y la resistencia á
la autoridad; y hoy con dificultad se hallará un
poseedor, sin propiedad reconocida, á quien no
se haya sugerido la idea de que el Ejecutivo es-
ta empeñado en despojarle violentamente de su
posesión.

El gobierno, pues, que, fundado en los mismos
principios que produjeron la citada consulta
de la Cámara de justicia, estaba dispuesto á re-
comendar á la lejislatura la resolución convenien-
te, y aun á presentar un proyecto de lei, que
conciliase en lo posible los intereses jenerales y
particulares, reconoce hoy la necesidad de adop-
tar desde luego una medida, que, cruzando las
miras siniestras de los ajitadores, ponga en evi-
dencia su conducta y sus principios, y haga sen-
tir á los poseedores de tierras, sin propiedad de-
clarada ó reconocida, que las providencias dic-
tadas sobre desalojo no han procedido en mane-
ra alguna de su autoridad; y que, no siéndole
permitido invadir las atribuciones del poder ju-
dicial, en cuanto esté en la esfera de sus faculta-
des se propone suspender el curso de las cuestio-
nes judiciales, que se hallen en los casos de la
consulta citada, y para cuya resolución, segun
la frase de la Cámara de justicia, faltan las
leyes que invoca, hasta tanto que la lejislatura
las dicte.

En consecuencia, el gobierno acuerda se pre-
venga al Fiscal jeneral que promueva y persiga
con empeño, en todos los casos en que fuere
de hacerse, las acciones y derechos que resulten
de la consulta y de los principios expuestos; para lo
cual se le pase copia de ella y de este acuerdo.

Que se comunique igualmente á la Honorable
Cámara de justicia, interpellando su prudencia y
sabiduría para que obtempere á la suspensión de
los expedientes relativos á los casos expuestos,
y de los despachos librados para desalojo.

Que el escribano de hacienda certifique lo que
conste sobre las providencias de desalojo que se
hayán librado, desde Diciembre de 1830; espe-
rando los propietarios que las solicitaron, trámites
que corrieron, juzgados que las dictaron, fechas,
términos y condiciones con que se espidieron.

Que este acuerdo y documentos á que se refe-
re se publiquen y circulen á todos los jefes polí-
ticos y curas párrocos, con encargo á estos de
leerlos por ocho dias festivos, despues de la mi-
sa; y á aquellos de comunicarlos á sus tenientes,
y usar de todos los medios que concurran á su
mayor publicidad; dando cuenta unos y otros de
haberlos verificado.

PEREZ.
Santiago Vazquez.

Documentos á que se refiere el acuerdo anterior.
(Consulta de la Cámara.)

Exmo. Sr.—Como era natural esperar, la Cá-

mara de apelaciones ha empezado á encontrar
dificultades para fallar en las cuestiones que se
suscitan sobre propiedad de tierras en la campaña
del Estado. Las leyes que nos rigen no han po-
dido prever los casos que han ocurrido, en las
multiplicadas y diferentes, como extraordinarias
circunstancias, en que se ha hallado este territorio.
Los derechos por consiguiente son inciertos, y
nada seria mas peligroso que el dejar al juicio de
los tribunales la decision de las contiendas, que
en esta línea deberán suscitarse. La incertidum-
bre y el interes harán nacer los pleitos, y ellos
por sí son un mal muy grande, sin contar los ries-
gos que el buen derecho corre, cuando leyes
ciertas y precisas no sirven de garantía contra
el error y las pasiones de los jueces. Por lo mis-
mo, se hace necesario suplicar á la Honorable
Asamblea, en quien reside el poder, se digne ocu-
par con preferencia de este objeto, reuniendo, si
es posible, en una sola ley todos los casos que no
están previstos en las leyes existentes. El Tri-
bunal se limita á indicar los mas notables.

1.º Denuncias, mercedes y ventas de terre-
nos, que precedieron al año de 1810, pertene-
cientes á individuos de origen español, cuyas pro-
piedades fueron secuestradas por el gobierno de
las Provincias Unidas, sin que conste haberse
hecho estensivas en la práctica á las tierras que
ocupaban en la campaña.

2. Denuncias, mercedes y ventas por el go-
bierno de las Provincias Unidas, cuando este Es-
tado era una de ellas.

3. Denuncias, mercedes y ventas por el gene-
ral Artigas, y comisionados que tomaban su nom-
bre, de posesiones ó propiedades públicas valutas,
ó de individuos españoles de origen, ó personas
de las Provincias Unidas, en la época en que es-
taba de hecho separado de ellas este Estado.

4. Denuncias, mercedes y ventas por los go-
biernos portugueses é imperial, interin han ocupa-
do el territorio de este Estado, ora respecto de
propiedades públicas, ora restituidas á particu-
lares, que habían sido donadas por el jeneral
Artigas ó sus Comisionados.

Estos son los cuatro casos principales, que po-
drán subdividirse en doble número, por diferen-
cias mas ó menos notables. El tribunal se abste-
niere de dar su dictamen, porque no cree hallar-
se en el caso del artículo 65 del Reglamento pro-
visorio, pues que no es duda la que le ocurre, sino
falta de leyes que invocar, por no haberlas en los
códigos que nos rigen.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Montevi-
deo, Enero 13 de 1830.—Jaime de Zudañez.—
Lorenzo Villegas.—Julian Alvarez.

Exmo. Señor Gobernador y Capitan Jeneral
D. José Rondeau.

NOTA Con que el gobierno elevó á la Honora-
ble Asamblea jeneral constituyente la consulta
anterior.

El Gobierno trasmite á la consideración de
la H. Asamblea las dos consultas que, con es-
te objeto, le ha dirigido la Exma. Cámara el 13
del corriente, relativas al modo con que debe
procederse en los juicios sobre venta de esclavos,
y en las cuestiones que se susciten, y se
hallan entabladas actualmente, sobre propiedad
de tierras en la campaña.

El gobierno saluda á los Honorables Repre-
sentantes con el respeto de costumbre.

JOSÉ RONDEAU.

Fructuoso Rivera.

Honorable Asamblea jeneral, constituyente
y lejislativa del Estado.

EL PATRIOTA.

MONTVIDEO MARTES 17 DE 1832.

El acuerdo del gobierno, que se lee
entre los documentos oficiales de este
número, es una pieza de primera im-
portancia, bajo cualquier aspecto que
se le considere. Pocos dias han pasa-
do desde que, en un periódico de es-
ta capital, pareció un artículo, en que
su autor se quejaba de la conducta y
de los medios de que se valen algunos

hombres, para sobrevar una clase nu-
merosa de los habitantes de nuestra
campaña. También nosotros habia-
mos visto algunas cartas, en las que
se aseguraba igualmente que aquellos
medios ilícitos se ponían en práctica
con tan detestable objeto. Pero el acu-
erdo del gobierno, fecha 12 del cor-
riente, ha venido á poner de manifies-
to el plan sistemado de los perturbado-
res, y á cruzar hábilmente sus maqui-
naciones. Antes de ahora ya la auto-
ridad ejecutiva habia dado algun paso,
que manifestaba cuan necesario y justo
creía proporcionar á los pobladores,
llamados intrusos, terrenos en que pu-
dieran establecerse con sus pequeñas
haciendas, sin temor de ser inquietados.
Recuérdese el decreto de 2 de diciem-
bre último, en cuyo artículo 2.º se
establece que "de cada denuncia (de
"tierras de propiedad pública) se reserva-
"rá la tercera parte, para que el gobierno
"la destine á la colocación de los posee-
"dores sin propiedad territorial, y pe-
"queños propietarios de haciendas de
"campo, que habiten en posesiones de
"pertenencia particular." Es visto, pues,
que el gobierno, lejos de perseguir á
los intrusos, ha procurado ya algunos
medios de establecerlos, sin que se
vean expuestos á continuas emigracio-
nes, al arbitrio de los verdaderos pro-
pietarios, ó de aquellos á cuyo poder
pase adelante el dominio útil de las tier-
ras públicas, á consecuencia de contra-
tos enfiteúticos.

Este solo hecho, que consta de un
documento oficial, bastaria para aquie-
tar á los pobladores de nuestra cam-
paña, y para inspirarles confianza en las
miras benéficas y paternales del gobier-
no: pero, como el odio personal nada
respetaba y de todo abusaba, no faltan
jenios discolos que, sacando partido del
cuidado y temor en que viven los pai-
sanos del campo, que no tienen propie-
dad territorial, y abusando de su incau-
ta sencillez, emplean una habilidad ma-
ligna en hacerles creer que el gobierno
es el empeñado en lanzarlos de los ter-
renos en que se han establecido. Los
moradores del campo, escasos aun de
aquellas luces que son mas comunes,
confunden muy fácilmente todos los
actos que emanan de los distintos po-
deres sociales, ó mas propiamente ha-
blando, no creen que hai otro poder
que el que ejerce la autoridad ejecu-
tiva: de ahí viene que miran todos los
mandatos judiciales como otras tantas
disposiciones del gobierno, y cuando
un tribunal de justicia, haciéndola á un
propietario, ordena que desalojen sus
tierras los intrusos, estos piensan que
semejante desalojo es una violencia
que les hace el primer magistrado. Su-
puesta una marcha recta en la admi-
nistración, semejantes errores serian
muy pronto desvanecidos por la misma
evidencia de las cosas, si no hu-
biese perturbadores dedicados á
confirmar en ellos á los sencillos cam-
pesinos, para hacerlos ciegos instru-
mentos de una obra de destrucción
y de anarquía. Con dificultad se
citará una República en la América
meridional, en que la independencia del
poder judicial esté mas práctica y só-

lidamente establecida que en esta: la lei niega al Poder Ejecutivo hasta el nombramiento de los jueces superiores; y á la verdad, no sabemos que haya llegado caso, desde que este país es independiente, en que su gobierno haya invadido los dominios del poder judicial. Esta observacion habrá ocurrido sin duda á cuantos hayan fijado la consideracion en nuestros negocios publicos, y de ella, tanto como de las leyes que han establecido la independencia de los poderes, resulta que, en manera alguna, puede el Ejecutivo ser responsable de las determinaciones de judicial. Solo, pues, el espíritu de partido pudiera entre nosotros haber sugerido á los perturbadores un arbitrio tan detestable, para concitar el odio de los moradores del campo contra la primera autoridad del país. Felizmente sus proyectos no han dado hasta hoy el resultado funesto á que aspiraban: los paisanos quieren paz y tranquilidad; y si bien las especies subversivas, derramadas entre ellos, han podido causar algun descontento, este no se ha manifestado de un modo activo y hostil; y calmará sin duda, cuando circule por todos los ángulos de la República el acuerdo del gobierno, que nos ha sugerido las ideas verdaderas en este artículo.

Tal acuerdo sin embargo no supone que la autoridad haya tenido en vista principalmente la necesidad de cruzar los proyectos siniestros de sus enemigos. Sólidos principios de equidad y de justicia, practicados frecuentemente en países que se han hallado en circunstancias análogas á las del Estado Oriental, han influido poderosamente en el ánimo del gobierno. Las cuestiones y pleitos sobre posesion de tierras se originan entre nosotros de causas tan diversas, cuantos son distintos los derechos que los poseedores alegan para legitimar su posesion. La naturaleza de los títulos que la acreditan es incierta en unos, tal vez ilegítima en otros, y dudosa en todos, excepto en aquellos cuya propiedad es tan reconocida, que no ha sido jamas disputada. Así es que la gran cuestion no está reducida á lanzar, ó no, á los llamados intrusos de los terrenos de una propiedad particular indisputable. Si esto solo hubiera, fácil quizá sería arribar á un acomodamiento; pero el problema es otro, y á la verdad de una solucion muy difícil. Es necesario averiguar nada ménos, y con relacion á la mayor parte del territorio, quienes son intrusos y quienes no, y esta averiguacion es de suyo dificultosa y delicada. Ya lo habia sentido así el tribunal superior de justicia, y nada manifiesta mas la complicacion de este negocio que la consulta elevada por dicho tribunal al gobierno, en 13 de enero de 1830. Léanse los cuatro puntos principales á que esa consulta es contraída, y se verá que existen muchos poseedores actuales de tierras, cuyos títulos vienen de tan diversos orígenes, que el tribunal ni puede reconocerlos por léjtimos, ateniéndose á las solas leyes existentes, ni desecharlos como ilegales, si atiende á la respe-

tabilidad de muchos de ellos.

Esta complicacion evidentemente nace de lo que no ha estado en mano de nadie evitar: la fuerza irresistible de los sucesos ha sido su sola causa. Así es que, en el día, es imposible arreglar este negocio, sin examinar detenidamente hasta que punto deben reputarse valederos y firmes los actos de los gobiernos extrajeros, á que desgraciada y alternativamente se ha visto sujeto el país; hasta que punto deben considerarse tales los de ciertas autoridades de hecho, que dominaron mucho tiempo el territorio, antes de la ocupacion extranjera; hasta que punto, en fin, pueden creerse subsistentes los efectos de algunos decretos, expedidos por las primeras autoridades pátrias, contra muchos individuos, cuyas propiedades fueron secuestradas, y pasaron á otras manos. Aun el exámen de los principios que reglan la prescripcion, debe entrar para mucho en la resolucion de un gran número de casos. Todos los poseedores, que se hallan en alguno de los indicados, se creen poseedores léjtimos, en fuerza de títulos, cuya validez disputan otros, que alegan diverso derecho á la misma propiedad. Es visto, pues, que solo nuevas leyes, terminantes y positivas, podrán arreglar este caos; y es tanto mas urgente la necesidad de reclamarlas, cuanto es excesivo el número de los pobladores que se hallan en alguno de los casos, que hacen presumible ó disputable un derecho.

El tribunal superior de la justicia ha dicho, con mucha razon, que tal estado de cosas será un semillero perpetuo de litijios, y que los jueces se verán siempre embarazados para fallar en estos pleitos, á causa de que las leyes comunes no han podido prever las circunstancias especiales en que este país se ha encontrado. Nada mas peligroso, por otra parte, ni que mas contribuya á perpetuar aquellas desavenencias, que la arbitrariedad con que se expiden los tribunales en todos estos asuntos. Cuando decimos *arbitrariedad*, está muy léjos de nosotros la idea que comunmente se expresa con esta palabra: no queremos decir que los jueces prescindan de las reglas de la justicia, por seguir las de sus caprichos; sino que, careciendo de leyes determinadas y expresas, á que puedan sujetar sus fallos en esta materia, naturalmente sus resoluciones, en la necesidad de juzgar, han de ser fundadas en sus opiniones particulares, ó en las reglas y práctica que hayan establecido ellos mismos. *El buen derecho*, ha dicho el mismo tribunal superior, *corre grandes riesgos, cuando leyes ciertas y precisas no sirven de garantía contra el error y las pasiones de los jueces.* ¿Cuanto debe llamar esta frase la atencion del gobierno y de los legisladores! ¿Cuan urgente es dar esas garantías! ¿Y cuan interesada está en ellas la tranquilidad del país! Nosotros, á la verdad, no teníamos noticia de la consulta de la Cámara á que hacemos referencia; mas, despues que la hemos visto, faltariamos á nuestra

conciencia si no dijéramos, que solicitar cuanto antes las leyes que se extrañan, es ya uno de los primeros deberes del gobierno, y que la próxima legislatura apenas podrá ocuparse, á juicio nuestro, en un negocio mas importante y que sufra ménos retardo.

Entretanto, no creemos que haya hombres, amigos de su país, que no aprueben el acuerdo del 12 del que rije. El gobierno, impotente por sí mismo para remediar el mal, há hecho lo único que le es permitido: impedir en lo posible sus progresos. Incitando al poder judicial, cuyas atribuciones son ajenas de las suyas, á que suspenda el curso de los expedientes que se hallen en el caso de la consulta, el Poder Ejecutivo há dado un paso que no solo acredita cuan distante está de pretender el desalojo de los poseedores que se creen con derecho á las tierras que ocupan, sino tambien su empeño en que se establezca el solo imperio de la lei. La suspension, á que el gobierno estimula á los jueces, solo será duradera hasta que la Asamblea jeneral sancione las leyes especiales que los tribunales cohan ménos; y mientras no llegue el caso de esta sancion, los habitantes de la campaña no pueden temer ser inquietados, si el Poder judicial cede, como es de esperarse, á la insinuacion del ejecutivo, convencido de la justicia y razon que la motivan. Y á la verdad, que cuando la Cámara misma há reclamado tiempo há, y de un modo que hace honor á su rectitud y á sus luces, unas leyes que cree necesarias, y sin las que confiesa que se vé embarazada para expedirse, no hai razon para dudar que consienta en lo que el gobierno propone.

El acuerdo, pues, de 12 del corriente, cuya principal tendencia es á sofocar en el país el jermen fecundo de disensiones y pleitos, producirá tambien un efecto secundario de la mayor importancia. No solo tal acuerdo es la mas solemne desmentida á los que, abusando de la credulidad de nuestros hombres del campo, fomentaban en ellos el odio á la autoridad, sino que él arrancará para siempre de mano de los maquinadores esas armas vedadas. En efecto, por prevenidos que esten contra el gobierno los ánimos de los moradores de la campaña, ¿cual de ellos, en vista del precitado acuerdo, podrá atribuirle la causa de sus pasados temores, ó dudará de que puede vivir tranquilo en adelante, esperando el fallo imparcial de la lei? ¿Cual de ellos, á quien llegue noticia de esta determinacion, permanecerá en la creencia de que era el gobierno quien estaba empeñado en lanzarlo del terreno que actualmente ocupa? Creemos que este solo paso de la autoridad inutilizará todos los que hayan dado en la campaña los perturbadores del orden, y enjendrará en sus moradores la aversion con que naturalmente miramos á los que una vez nos engañaron. Aquellos hombres sencillos conocerán al cabo que se les queria arrastrar á la sedicion y al desorden, abusando traicionablemente de su inexperiencia, y serán en adelante mas advertidos y cautos.

Nuestros lectores excusarán sin du-

da la extension que hemos dado á este artículo: la importancia de la materia, á nuestro parecer, la exijia.

Obligados á reproducir en nuestras columnas todos los documentos oficiales, aun cuando los hayan publicado con anticipacion otros periódicos, hemos retirado de la imprenta, por dar lugar á los artículos de oficio, que se leen en este número, el que habiamos prometido para hoi con algunas reflexiones, que aun creemos necesarias, acerca del *crédito público*. Cumplirémos nuestra palabra en el próximo número.

No podemos responder de no ocuparnos mas en el negocio que motivó las últimas desavenencias entre el Gobierno y la comision directiva de accionistas, para la extincion de la moneda de cobre extranjera. Créemos ya fastidiado el público, á fuerza de estar instruído por la prensa en todos los pormenores de este incidente: así que, por nuestra parte, evitaremos hablar de él en adelante; pero como depende aun la resolucion de la Honorable Comision Permanente de la Asamblea, á la que una y otra parte han ocurrido, es mui posible que volvamos á hablar del asunto, cuando aquella corporacion se expida. Hoi no lo tocaríamos, á no ser sabedores de cierta ocurrencia.

Se nos há informado de que el Tesorero de la República se ha quejado de que los periódicos le han puesto en un punto de vista que no le corresponde, en las varias relaciones que han hecho de estos sucesos. No sabemos si, en esta queja, está tambien comprendido el *Patriota*: pero él debe asegurar, por si acaso, que, no habiendo tenido jamas en vista mas que el bien público, há estado siempre mui lejos de su intencion agraviar á los particulares. Por lo que respecta al Tesorero jeneral de la República, en el caso en cuestion, de la relacion que há hecho el *Patriota* de los hechos podrá quizas inferirse que hubo alguna inadvertencia ó falta de reflexion en aquel funcionario; pero nunca fué nuestro ánimo til dar su conducta, de modo que apareciera culpable ante el público, ni creemos que haya en este negocio motivo alguno para hacerle aparecer como tal. No es presumible que el Tesorero haya tenido interes en hostilizar al ministerio, cuando una hostilidad semejante pudiera hacer efectiva su propia responsabilidad.

Hemos creído de nuestro deber escribir estas cortas líneas, porque no quisiéramos que empleado ni particular alguno hallase nunca en nuestros escritos cosa capaz de agraviarle. Valgan lo que valgan nuestras producciones, la personalidad no ha entrado jamas en ellas, y no quisiéramos aparecer, ni una sola vez, como arrastrados de un sentimiento tal. Si no sabemos defender bien la causa pública, a lo ménos no se nos acusará de que no sabemos respetar las personas. Si el *Patriota*, pues, tambien está comprendido en la queja del tesorero, no creemos que, despues de lo dicho, se

guirá interpretando nuestros anteriores conceptos de un modo que le sea perjudicial: pero de todos modos, nos interesa que él y el público se convengan de que, cualquiera que sea el negocio de que tratémos, para nada entran las personas en nuestro modo de ver las cosas.

Ibamos á cerrar aqui este artículo, cuando llegó á nuestras manos la nota oficial, en que la Honorable Comision Permanente de la Asamblea hace saber al gobierno que no cree llegado el caso de poner en ejercicio las atribuciones que por la constitucion le competen, á consecuencia de las diferencias suscitadas entre el Poder Ejecutivo y la Comision directiva. El artículo 56 de la constitucion del Estado dice así: "la Comision Permanente velará sobre la observancia de la Constitucion y de las leyes, haciendo al Poder Ejecutivo las advertencias convenientes al efecto, bajo de responsabilidad para ante la Asamblea jeneral."

Es claro, pues, que la Comision permanente no ha creído fundada la acusacion que suponía la violacion de una lei por parte del gobierno: si tal hubiese creído, le hubiera hecho las advertencias que el código constitucional previene, y no habria querido cargar, por omitirlas, con la responsabilidad que de ello le resultaria. El pronunciamiento de aquella corporacion ha vindicado al gobierno, y contribuirá en gran parte á completar el desengaño del público. No sabemos si él aquietará igualmente á los que, empeñados en que por fuerza habia de ser criminal el ministerio, ven hoi que aquellos que, por la lei, son constituidos guardianes de su completa observancia, juzgan que no se ha quebrantado ninguna de las que la lejislatura ha sancionado.

AVISO DE LA POLICIA.

D Carlos Carbidge, L. Mary y Am Carbidge, Subditos Britanicos, y Tomas Nell, procedente de la Bahia, no han cumplido con lo que previene la policia en su aviso de 5 del corriente lo que se avisa al público, y á los Teniente Alcaldes de Barrio, para que averiguado que sea donde existan los conduzcan arrestados á este Departamento; de lo que se há hecho igual prevencion á los Tenientes de Policia. Montevideo Enero 13 de 1832.

LAMAS.

AVISO.

LA COMISION DIRECTIVA, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley de 26 de Enero, y segun lo acordado en Junta jeneral de Accionistas, fecha de 20 de Diciembre del año pasado, hace saber á los SS. Accionistas que el Martes 17 del corriente, á las 10 de la mañana, se sortearán á la puerta de su Tesoreria, en la casa fuerte, cincuenta y seis cuartas partes de Accion, con lo que quedarán amortizadas 14 Acciones; á cuyo acto les invita para que se sirvan asistir. Montevideo, 15 de Enero de 1832.

AVISO DE LA POLICIA.

D Rodolfo C. Geyer, D. José de Sn. Paula Aguiar, y D. Marsena Monzon, llegados de la Republica Argentina, no se han presentado en este Departamento como se tiene ordenado. Montevideo Enero 16 de 1832.

LAMAS.

Aviso de la Policia.

LAS disposiciones hasta hoy tomadas por la Policia para contener la estafa que hacen al público en la venta de frutas y aves los revendedores que asisten al mercado, no han llenado el objeto que se habia propuesto el Gefe que firma; y sin embargo de las prevenciones que se hizo cuando se presentaron, á consecuencia de Aviso del mismo de 29 de Agosto del año pasado, ellos continuan gravandolo y la poblacion siente los efectos: En esta virtud, para evitar las quejas del vecindario, y fomentar el antiguo mercado—

Art. 1. Desde el día 15 del corriente, todos los revendedores se trasladarán á la Plazoleta, que se halla al frente de la Ciudadela.

2. Los que, despues del término dicho, se hallaren expendiendo sus frutas en donde han acostumbrado, se sujetarán á la pena que se tenga á bien imponerles.

Montevideo, y Enero 12 de 1832.

LAMAS.

EDICTO DE LA POLICIA.

TODAS las disposiciones hasta ahora tomadas por la Policia, para que en la Oficina de ella se presenten los pasajeros que llegan á este puerto, han sido infructuosas y despreciadas por aquellos, pues aunque al infrascripto le consta que el Sr. Capitan del Puerto les previene lo conveniente á su desembarco, nunca puede conseguirse que llene aquella disposicion; en su consecuencia el Gefe que firma há resuelto:—

Art. 1.º A las 24 horas precisas que desembarque cualquier individuo en este puerto, debe presentarse en la oficina del Departamento de Policia, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde; y si su llegada es despues de la última, lo hará al siguiente día indispensablemente.

2.º Los Tenientes Alcaldes de barrio vigilarán y harán la misma prevencion á los que notaren extraños en su respectiva calle; al efecto se comunica al Sr. Alcalde Ordinario, para que así lo ordene á los primeros.

3.º Pasado el plazo estipulado en el artículo 1.º y no habiendo cumplido lo que en él se previene, por los pasaportes que existan en este Departamento se dará su nombre á los diarios, con el motivo que dá mérito, y se ordenará á los Tenientes de Policia y Alcaldes de barrio, averigüen donde se halla el sugeto, para que lo remitan arrestado al expresado; de lo que se dará cuenta al Superior Gobierno.

Montevideo, Enero 5 de 1832.

LAMAS.

AVISO DE LA POLICIA.

TENIENDO noticias el gefe que firma que varios inquilinos se niegan á satisfacer á los propietarios defincas el derecho de un real y medio que paga cada puerta por el alumbrado de las calles, prestando que segun el Edicto de Policia de 25 de Agosto pasado deben abonarlos estos; el infrascripto declaró que la practica constante hasta ahora establecida ha sido y es, que los citados inquilinos paguen aquel derecho por el bien que les resulta del alumbrado de las calles, razon por que son gravados con este impuesto ha muchos años, mas como á la Policia le es imposible llevar á efecto este cobro por los infinitos individuos con quienes tiene que entenderse para asegurar esta recaudacion, la exige de los dueños de las fincas, sin perjuicio, y como es justo que estos sean reintegrados de aquella cantidad por sus arrendadores al efecto y para en caso de resistencia el que subcribe lo comunica al Sr. Alcalde Ordinario para que por medio de los tenientes Alcaldes de Barrio haga efectiva esta determinacion.

Montevideo Enero 4 de 1832.

LAMAS.